



TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
AUTO DE INTERLOCUTORIO No 191

Santiago de Cali, primero (1º) de septiembre de dos mil veinte (2020)

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD ELECTORAL. ÚNICA INSTANCIA
DEMANDANTE:	GUSTAVO ADOLFO PRADO CARDONA Y OTROS
DEMANDADOS:	JUAN MANUEL GARCÍA PEREA Y OTROS
PROCESO:	76001-23-33-000-2019-01210-00
ASUNTO:	AUTO INTERLOCUTORIO. RESUELVE EXCEPCIONES PREVIAS A LA LUZ DEL DECRETO 806 DE 2020

I. ANTECEDENTES

La parte demandante, actuando en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, pretende la nulidad de los actos de elección proferidos por el Consejo Nacional Electoral: Formulario E8 CON, lista definitiva de candidatos al Concejo Municipal de El Dovio, Valle del Cauca, inscrita por el partido Unidad Nacional Partido de la U; Formulario E26 CON, Acta del escrutinio general de los votos depositados para el Concejo Municipal de Tuluá y Acta de elección de los Concejales Juan Manuel García Perea, Luis Hernando Cardona Carmona, Luz Amparo Agudelo Ruiz y Robinson Londoño Cardona del Municipio de El Dovio, Departamento del Valle del Cauca, periodo 2020-2023.

La demanda fue radicada el 18 de diciembre de 2019 (Fl. 114); por auto interlocutorio No 002 del 20 de enero de 2020 se admitió (Fls. 115-117).

Al apoderado de los concejales demandados se le notificó personalmente la demanda en la secretaría de la corporación el 30 de enero de 2020 (Fl. 204), corrió el término para la contestación del 4 de febrero al 2 de marzo de 2020¹. Contestó la demanda el 24 de febrero de 2020 (Fls. 223-244), es decir, dentro del término legal. Al Consejo Nacional Electoral, Concejo de Dagua, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público se les notificó la demanda el 22 de enero de 2020 (Fls. 119-125), corrieron términos para contestar del 30 de enero al 19 de febrero de 2020 (Fl. 253 vuelto). El Consejo Nacional Electoral contestó la demanda el 13 de febrero de 2020 (Fls. 207-211) en tiempo, y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no contestó la demanda.

El traslado de las excepciones propuestas se surtió el 2 de marzo de 2020 (Fl. 254 vuelto), que transcurrió durante los días 3, 4 y 5 de marzo de 2020, con pronunciamiento de la contraparte el 4 de marzo de 2020 (Fls. 259-273).

II. CONSIDERACIONES

Mediante decretos 417 del 17 de marzo y 637 del 6 de mayo de 2020 el Gobierno Nacional dispuso “*el estado de emergencia económica, social y*

¹ Se dejan pasar 3 días de que habla el literal f) del artículo 277 del CPACA

ecológica en todo el territorio nacional”, con ocasión de la pandemia declarada por la OMS por motivo de la Covid-19, razón por la que el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020 *“Por el cual se complementan las medidas transitorias de salubridad pública adoptadas mediante el Acuerdo 11517 de 2020”* dispuso que los funcionarios y empleados judiciales trabajen desde sus casas, por lo que se hace necesario adelantar todas las actuaciones que se deriven de esta providencia a través de los medios electrónicos, como lo contempla el artículo 186 del CPACA.

Por Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020 se levantó la suspensión de términos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura entre el 16 de marzo y el 31 de junio de 2020².

De otro lado, el Gobierno Nacional expidió el 4 de junio de 2020, el decreto legislativo No 806³, donde, entre otras consideraciones, señaló:

“(…) Que igualmente, es importante crear disposiciones que agilicen el trámite de los procesos judiciales y permitan la participación de todos los sujetos procesales, contrarrestando la congestión judicial que naturalmente incrementó la suspensión de los términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura con fundamento en la emergencia sanitaria.

Que, por lo anterior, es necesario **crear un marco normativo que se compadezca con la situación actual que vive el mundo y especialmente Colombia, que perdure durante el estado de emergencia sanitaria**, y que establezca un término de transición mientras se logra la completa normalidad y aplicación de las normas ordinarias.

Que este marco normativo **procurará que por regla general las actuaciones judiciales se tramiten a través de medios virtuales y excepcionalmente de manera presencial**. Por lo que se debe entender que las disposiciones de este decreto complementan las normas procesales vigentes, las cuales seguirán siendo aplicables a las actuaciones no reguladas en este decreto.

(…)

Que estas medidas, se adoptarán en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición de este decreto (...)”. (Resalta la Sala).

En esta secuencia, el artículo 12 dispone:

“Artículo 12. Resolución de excepciones en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De las excepciones presentadas se correrá traslado por el término de tres (3) días en la forma regulada en el artículo 110 del Código General del Proceso, o el que lo sustituya. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre ellas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en las excepciones previas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 Y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del

² Por Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526 y PCSJA20-11529 de marzo de 2020; PCSJA20-11532, PCSJA20-11546 de abril de 2020; y PCSJA11547, PCSJA20-11556 y PCSJA20-11549 de mayo de 2020 dispuso suspender los términos de las actuaciones judiciales salvo algunas excepciones.

³ Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

citado código, el juzgador las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva se tramitarán y decidirán en los términos señalados anteriormente.

La providencia que resuelva las excepciones mencionadas deberá ser adoptada en primera instancia por el juez, subsección, sección o sala de conocimiento. Contra esta decisión procederá el recurso apelación, el cual será resuelto por la subsección, sección o sala del tribunal o Consejo de Estado. Cuando esta decisión se profiera en única instancia por los tribunales y Consejo de Estado se decidirá por el magistrado ponente y será suplicable.

Si bien el artículo 283 del CPACA no indica de manera expresa la resolución de excepciones previas en el marco del proceso de nulidad electoral, lo cierto es que la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado ha indicado que: “...*el juez electoral en aplicación del principio de integración normativa, puede y debe pronunciarse en la audiencia inicial sobre las excepciones previas propuestas por las partes*”⁴.

En este orden, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto 806 de 2020 analizado en precedencia, la Sala se pronunciará sobre las excepciones previas propuestas.

Caso concreto:

El apoderado de los concejales Juan Manuel García Perea, Luis Hernando Cardona Carmona, Luz Amparo Agudelo Ruiz y Robinson Londoño Cardona propusieron como excepción previa la que denominaron inepta demanda; en primer lugar, porque no se determinó cuál o cuáles de las causales de nulidad establecidas en los artículos 137 y 275 del CPACA sustentan la solicitud de nulidad electoral, máxime cuando en materia contenciosa rige el principio de justicia rogada; y en segundo lugar, por demandarse como pretensión directa la nulidad de un acto preparatorio o de trámite como lo es el formulario E-8CON pues solo los actos definitivos que ponen fin a una actuación administrativa son susceptibles de producir consecuencias anulatorias (Fls. 227-228).

Así mismo, el Consejo Nacional Electoral, propuso la que denominó *falta de Legitimación en la causa por pasiva*; sostuvo la entidad no tiene incidencia alguna en la distribución y otorgamiento de avales por parte de las agrupaciones políticas, dicha actuación es del resorte exclusivo de cada organización con base en sus estatutos. Tampoco participó en la declaratoria de la elección cuya nulidad se demanda; agregó que, solo es competente de realizar los escrutinios a nivel general nacional, lo que indica que son las comisiones escrutadoras distritales y municipales las encargadas de hacer los escrutinios y declarar las elecciones municipales y locales, tal y como lo establece el decreto 2241 de 1986.

⁴ Auto de Sala del 18 de febrero de 2016, radicación 25000-23-41-000-2015-00101-02 CP. Alberto Yepes Barreiro

Con respecto a la inepta demanda por no haber determinado de manera concreta la causal de nulidad deprecada; la parte demandante claramente en la demanda manifestó que debido a que la conducta irregular no se enmarcaba en las taxativamente señaladas en el artículo 275 debía acudir al artículo 137 del CPACA por remisión expresa de aquel; en este orden, para la sala la causal se encuentra establecida cuando para el demandante el aval otorgado por el Partido de la U a los candidatos al Concejo Municipal de Tuluá por quien no fungía como Representante Legal constituye una infracción de las normas constitucionales, que vicia su elección. (Fls. 2-5).

Por el contrario, referente a la demanda de los formularios E-8, la Sala considera que existe una inepta demanda, así como frente la solicitud de nulidad de los Formularios E-6⁵ (Fls. 105-107) pues éstos son actos de trámite no pasibles de control jurisdiccional; el artículo 275 del C.P.A.C.A., señala que los actos de elección son nulos en los eventos previstos en el artículo 137⁶ de la ley 1437 de 2011 y los formularios demandados si bien contienen las listas definitivas de candidatos a la elección de concejales del municipio de Tuluá 2020 – 2023, no son actos de elección, son actos de trámite que relacionan quienes fueron los candidatos inscritos por cada partido, por eso debe atacarse es el acto definitivo que lo es el formulario E-26.

Respecto a la falta de legitimación en la causa por pasiva del Consejo Nacional Electoral, jurisprudencialmente se ha establecido que la legitimación en la causa de hecho es la calidad que le permite a una persona que hace parte de una relación jurídica, formular demandas u oponerse a las pretensiones que en su contra se formule; supone establecer que quien demanda tiene la titularidad para reclamar el interés jurídico que se debate en el proceso, que no la procedencia de las pretensiones incoadas, de tal suerte que la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho sustancial, sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la misma en el proceso⁷; y la legitimación en la causa material alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda⁸.

En esta secuencia, al Consejo Nacional Electoral de conformidad con lo establecido en el artículo 265 de la C.P.⁹, le corresponde, entre otros, velar por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías; de otro lado, de conformidad con el artículo 166 del Código Electoral¹⁰, los delegados del Consejo Nacional Electoral son superiores funcionales de las Comisiones Escrutadoras Distritales o Municipales; y,

⁵ -6 Acta de solicitud y aceptación de inscripción de candidatos. <https://www.registraduria.gov.co/Conozca-el-glosario-de-los.html>

⁶ **ARTÍCULO 137. NULIDAD.** Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió...”

⁷ Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de junio 12 de 2014, C.P. Olga Mérida Valle de la Hoz, Radicado N° 52001-23-31-000-2004-00732-01 (33658).

⁸ Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de mayo 14 de 2018, C.P. M. María Adriana Marín, radicado N° 0500-12-33-1000-2004-0419401(40175).

⁹ Funciones del Consejo Nacional Electoral

¹⁰ <Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 62 de 1988. El nuevo texto es el siguiente:> Las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares resolverán, con base en las actas respectivas, las reclamaciones que se hayan presentado ante los jurados de votación conforme al artículo 122 de este Código. Las apelaciones que se formulen contra las decisiones de las comisiones escrutadoras auxiliares, así como los desacuerdos que se presenten entre los miembros de éstas, serán resueltos por las correspondientes comisiones distrital o municipal, las que también harán el escrutinio general de los votos emitidos en el distrito o municipio, resolverán las reclamaciones que en este escrutinio se propongan, declararán la elección de concejales y alcaldes y expedirán las respectivas credenciales. Cuando sean apeladas las decisiones sobre reclamos que por primera vez se formulen en ese escrutinio general, o se presenten desacuerdos entre los miembros de las comisiones distrital o municipal, estas se abstendrán de expedir las credenciales para que sean los delegados del Consejo Nacional Electoral quienes resuelvan el caso y expidan tales credenciales.

por último, el Consejo Nacional Electoral lo es de sus delegados. Así mismo, de conformidad con los artículos 122, 158, 164 y 192 del Código Electoral, es el Consejo Nacional Electoral a través de sus delegados quienes conocen las reclamaciones con ocasión de los escrutinios a las elecciones de las autoridades territoriales a las distintas corporaciones a elegir como asambleas, concejos y juntas administradoras locales.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: APLICAR al proceso las disposiciones del Decreto Legislativo 806 de 2020 en la forma dispuesta en la parte motiva de este auto.

SEGUNDO: Tener por contestada oportunamente la demanda por parte del Consejo Nacional Electoral, el Partido de la Unidad Nacional y, Juan Manuel García Perea, Luis Hernando Cardona Carmona, Luz Amparo Agudelo Ruiz y Robinson Londoño Cardona concejales del Municipio de El Dovio. Téngase por no contestada la demanda por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

TERCERO: DECLARAR probada la excepción de inepta demanda respecto de la solicitud de nulidad de los formularios E-6 y E-8 como actos no pasibles de control jurisdiccional por lo expuesto en precedencia.

CUARTO: DECLARAR no probadas las excepciones de inepta demanda y falta de legitimación en la causa por pasiva, propuestas por Juan Manuel García Perea, Luis Hernando Cardona Carmona, Luz Amparo Agudelo Ruiz y Robinson Londoño Cardona la primera, y la segunda por el Consejo Nacional Electoral de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

QUINTO: Se reconoce personería al abogado Armando González, identificado con la C.C. N° 14'977.958 de Cali (Valle), y T.P. N° 108.025 del C.S. de la J., como apoderado judicial de los demandados, en los términos y fines indicados en los poderes que obran a folios 253-256.

SEXTO: Se reconoce personería a la abogada Leidy Tatiana Yepes Joya identificada con la C.C. N° 1'057.570.950 de Sogamoso (B) y T.P. N° 309.475 del C.S. de la J., como apoderada judicial del Consejo Nacional Electoral en los términos y fines indicados en el acto de delegación N° 0385 de 2020 que obra del folio 165 y vuelto acompañado de la documental que acredita la calidad del poderdante, Magistrado Hernán Penagos Giraldo (Fls. 206 y 216).

SÉPTIMO: Se reconoce personería al abogado Álvaro Echeverri Londoño, identificado con la C.C. N° 10'255.488 y T.P. N° 94.461 del C.S. de la J., quien ostenta la Representación legal del Partido de Unidad Nacional, en adelante "Partido de la U", como apoderado judicial del Partido, en los términos y fines indicados en el literal c) del artículo 35 de los Estatutos del Partido (folio 42 C. 1), y Resoluciones N° 024 del 15 de noviembre de 2017 y 2954 del 29 de diciembre de 2017 (folios 224-225 y 148-151 Ibidem).

OCTAVO: Aceptar la renuncia presentada por la abogada Leidy Tatiana Yepes Joya identificada con la C.C. N° 1'057.570.950 de Sogamoso (B) y T.P. N° 309.475 del C.S. de la J., como apoderada judicial del Consejo Nacional Electoral, quien allegó la comunicación dirigida a su poderdante, tal como lo dispone el artículo 76 del CGP.

NOVENO: NOTIFÍQUESE la presente providencia por estado electrónico, en atención a lo dispuesto por el artículo 9° del Decreto 806 de 2020.

DÉCIMO: Para efecto de notificaciones y/o comunicaciones, se tendrán en cuenta las direcciones electrónicas y físicas que obran en el expediente, así: parte demandante: pradoabogado23@hotmail.com parte demandada: Concejales Juan Manuel García Perea, Luis Hernando Cardona Carmona, Luz Amparo Agudelo Ruiz y Robinson Londoño Cardona del Municipio de El argón. 51@hotmail.com y armagon51@hotmail.com Consejo Nacional Electoral: cnenotificaciones@cne.gov.co, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado: procesosnacionales@defensajuridica.gov.co, Concejo Municipal del Dovio: contactenos@eldovio-valle.gov.co Partido de la Unidad Nacional: aecheverry@partidodelau.com, Ministerio Público: procjudadm20@procuraduria.gov.co

De conformidad con el artículo 2 del Decreto 806, el canal oficial de comunicación e información para recibir memoriales es el correo electrónico: rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co

DÉCIMO: Ejecutoriada la presente providencia, ingrese nuevamente el expediente al despacho para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ZORANNY CASTILLO OTALORA
Magistrada